



Radicación: 2024060576-002-000

Fecha: 2024-05-06 19:09 Sec. día 11986

Anexos: No

Trámite: 490-PETICIÓN

Tipo doc: 39-RESPUESTA FINAL E

Remite: 90000-90000-DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR
FINANCIERO

Destinatario: 12 - 67-CONCEJO DE BOGOTÁ

Doctores

CESAR ANDRÉS RESTREPO FLÓREZ

Secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia

DAVID ANTONIO GARZÓN FANDIÑO

Sub-secretario de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno

CONCEJO DE BOGOTÁ

comisiondegobierno@concejodebogota.gov.co

correspondencia@concejodebogota.gov.co

Calle 36 NO. 28 A 41

Bogotá D.C.

CONCEJO DE BOGOTÁ 09-05-2024 10:33:29

2024ER11230 O 1 Fol:4 Anex:0

ORIGEN: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA/MARIA FERNANDEZ

DESTINO: COMISION 2ª PERM. GOBIERNO/GARZON FANDIÑO DAVID A

ASUNTO: RESPUESTA PROPOSICION 618 DE 2024

OBS: RECIBIDO 7/5/2024

Número de Radicación : 2024060576-002-000
Trámite : 490 PETICIÓN
Actividad : 39 RESPUESTA FINAL E
Expediente : xxxxxx
Anexos :

Respetados doctores:

Con todo gusto damos respuesta a su comunicación radicada en esta Superintendencia bajo el número indicado al rubro, en la cual se traslada por competencia el numeral 9 de la proposición 618 del Concejo de Bogotá, Rad. No. 1-2024-28452 y en la que se pregunta:

"9. ¿Cuál ha sido los mecanismos o estrategias a implementar para frenar el crecimiento de falsas entidades crediticias virtuales, que, sin mayores complicaciones, otorgan créditos a los ciudadanos ante la modalidad "gota a gota virtual?"

En primer lugar es oportuno señalar que la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) como entidad estatal de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo consagrado en el artículo 121 de la Constitución Política, sólo tiene competencia con relación a las materias a su cargo y con sujeción a las funciones atribuidas por la Constitución y la Ley, las cuales para el caso de esta Autoridad, se encuentran descritas en el Decreto 2555 de 2010 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, entre otras normas.

En efecto, en el artículo 11.2.1.3.1 del Decreto 2555 de 2010, está previsto que: *"El Presidente de la República, de acuerdo con la ley, ejerce a través de la Superintendencia Financiera de Colombia, la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público."*

La Superintendencia Financiera tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución Política de Colombia, las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150, ibidem, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado.

Las entidades sometidas a inspección, vigilancia o control de esta Superintendencia se encuentran señaladas en el numeral 2° del artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en el Decreto 1357 de 2018 relativo a entidades que participen en financiamiento colaborativo (crowdfunding), así como en el numeral 1° del párrafo 3° del artículo 75 de la Ley 964 de 2005 y la Ley 1735 de 2014 sobre Sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos y sólo éstas se encuentran autorizadas para desarrollar actividades exclusivas de nuestras vigiladas, dentro de ellas, captar masivamente recursos del público.

Teniendo en cuenta lo anterior, le informamos que frente a las entidades que no se encuentran bajo su vigilancia, esta Superintendencia no tiene competencia para pronunciarse respecto de su legalidad y mucho menos respecto del cumplimiento de sus relaciones contractuales. Por ello es preciso advertir a la ciudadanía que se debe tener cuidado con cualquier negociación que se pretenda realizar, por lo que la decisión de aceptar los ofrecimientos de crédito es libre y bajo la responsabilidad de cada uno, evaluando en todo sentido el riesgo en que se pueda estar incurriendo, atendiendo las recomendaciones que permanentemente viene emitiendo esta Superintendencia a través de su página web, redes sociales y comunicados de prensa, entre otros.

Además, dado que se hace referencia a operaciones de crédito, es pertinente indicar que el otorgamiento de créditos, no es una actividad exclusiva de las entidades financieras, toda vez que la misma puede ser llevada a cabo por personas no sujetas a la vigilancia de esta Superintendencia, por tanto, no requieren de autorización previa de esta Entidad para su constitución y/o funcionamiento, siempre y cuando dichas actividades se realicen con recursos propios y no sean obtenidos mediante la captación no autorizada de dineros del público en los términos previstos en los Decretos 1068 de 2015^[1] y Decreto 4334 de 2008^[2], de lo contrario, estarían sujetos a las medidas administrativas que por competencia impondría este

^[1] Artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, supuestos de captación masiva de recursos del público sin autorización. "(...) 1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte (20) personas o por más de cincuenta (50) obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona. Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. 2. Cuando, conjunta o separadamente haya celebrado en un período de tres (3) meses consecutivos más de veinte (20) contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos o valores a juicio del mandatario, o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie, a la vista o en un plazo convenido, y contra reembolso de un precio. Para determinar el período de los tres (3) meses a que se refiere el inciso anterior, podrá tenerse como fecha inicial la que corresponda a cualquiera de los contratos de mandato o de las operaciones de venta. Parágrafo 1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones: a) Que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido de aquella persona o; b) Que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas, o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares. Parágrafo 2. No quedarán comprendidos dentro de los cómputos a que se refiere el presente artículo las operaciones realizadas con el cónyuge o los parientes hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad y único civil, o con los socios o asociados que, teniendo previamente esta calidad en la respectiva sociedad o asociación durante un período de seis (6) meses consecutivos, posean individualmente una participación en el capital de la misma sociedad o asociación superior al cinco por ciento (5%) de dicho capital. (...)".

^[2] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 4334 de 2008, el Estado Colombiano debe intervenir toda actividad en la que existan hechos objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios mediante la modalidad de operación de captación o recaudo en operaciones no autorizadas, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes, a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable.

Organismo, así como a las acciones penales pertinentes, las cuales le corresponde investigar a las autoridades judiciales como la Fiscalía General de la Nación (FGN).

Ahora bien, en el entendido que la pregunta tiene relación con los mecanismos o estrategias que se tienen para frenar el crecimiento de *"falsas entidades crediticias virtuales"*, inclusive de manera general aquellas que pueden estar adelantando el gota a gota o prestadiario, esta autoridad en cada petición o queja que eleva la ciudadanía, aparte de hacerle las advertencias y recomendaciones debidas, también dirige las comunicaciones al supervisor de la actividad de crédito de no vigiladas por esta Autoridad (Art. 45 y 59 de la Ley 1480 de 2011), es decir, se trasladan a la Superintendencia de Industria y comercio (SIC), además de señalarse que si han sido objetos de engaño o eventual defraudación, como sucede muy frecuentemente con los *"falsos vigilados o falsos prestamistas"*, pueden acudir a la Fiscalía General de la Nación a efectos de investigar los delitos en los que se pueden ver incursos aquellas personas que están detrás de los ofrecimientos defraudatorios y sobrepasando la tasa de usura.

Adicionalmente, se ha venido desarrollando una estrategia de educación financiera tanto con la SIC como con la Superintendencia de Sociedades, en donde se hace presencia en diferentes municipios del territorio nacional, desarrollando jornadas preventivas acerca de los diferentes ofrecimientos de negocios, entre ellos el de préstamos virtuales con las características referidas, en donde especialmente la SIC y la SFC describen la conducta ilegal, la forma de darlas a conocer a las autoridades y especialmente se realizan las recomendaciones para que la ciudadanía no caiga en este tipo de actividades defraudatorias ilegales.

Por su parte, la SFC, en desarrollo del objetivo de prevención y protección del consumidor financiero, desarrolla charlas y capacitaciones en educación financiera en diferentes espacios abiertos al público en general (radio, televisión, prensa, redes sociales, entidades públicas, instituciones de educación, entre otros), partiendo del adecuado uso de los recursos, la orientación frente a las consultas, dando a conocer las múltiples alternativas que ofrecen las entidades vigiladas para la obtención de créditos, hasta los riesgos de aceptar ofertas de préstamos por fuera del sistema financiero, advirtiendo a la ciudadanía de la existencia precisamente de falsas firmas o inclusive de algunas que operan en la realidad, pero que abusan de los clientes en cuanto a cobros y maneras de exigir el pago de lo prestado, que rayan en la ilegalidad y que por tanto son puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación o de la Policía Judicial.

En las jornadas y charlas educativas se brindan las características de estas conductas, señalando su mecánica, la impersonalidad y/o anonimato del ofrecimiento y ejecución de estos esquemas, las diferencias que se presentan con el trámite de crédito ante instituciones vigiladas por este Organismo, destacando el papel y articulación de las diferentes autoridades en orden local y nacional para su represión.

En los anteriores términos esperamos haber atendido su consulta.

Cordialmente,



MARIA FERNANDA TENJO FANDIÑO
90000-DELEGADO PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO

90000-DELEGATURA PARA EL CONSUMIDOR FINANCIERO

Copia a:

Elaboró:
SAMUEL ANDRES OTALORA PEÑA

Revisó y aprobó:
--JOSE CAMILO TORRES DUQUE